



Comunidad de Madrid

Nº de registro: 2974/2020

ORDEN

En uso de las atribuciones que me ha sido conferidas por las disposiciones vigentes, y a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante la aparición del brote de COVID-19 a finales del año 2019 en China, con un rápido avance del número de contagios que obligaron a sus autoridades a adoptar drásticas medidas y posteriormente de múltiples réplicas en otros países, también con una rápida propagación, la Organización Mundial de la Salud, con fecha 11 de marzo de 2020, declaró la situación de pandemia internacional con el ánimo de paliar su rápida expansión, tanto a nivel nacional como internacional.

SEGUNDO.- En el ámbito educativo, al identificarse como potencial foco de propagación del virus los centros educativos, la Comunidad de Madrid publicó la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), donde se establece para el ámbito docente *“la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.”*

TERCERO.- Ante el progresivo avance de contagios, que se extiende a toda España y amenaza con colapsar el sistema sanitario nacional, se aprueba el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este Real Decreto, entre otras medidas, suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, manteniendo las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y "online", siempre que resulte posible.

Ante la persistencia de la pandemia el estado de alarma se ha visto prorrogado en sucesivas ocasiones hasta las 0.00 horas del día 21 de junio de 2020, según dispone el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

CUARTO.- Durante la vigencia del estado de alarma declarado, se dicta en España todo un cuerpo normativo regulador de medidas para combatir la propagación del COVID-19 y amortiguar sus impactos, entre el que se encuentra el Real Decreto-ley





Comunidad de Madrid

7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

QUINTO.- Una vez finalizado el estado de alarma, y ante la necesidad de coexistir con el virus que puede dar lugar rápidamente a nuevos brotes, se publica el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En el ámbito educativo, el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece que *"Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan."*

SEXTO.- El inicio del nuevo curso escolar 2020/2021, de forma escalonada con las primeras incorporaciones ya el 4 de septiembre de 2020, supone el regreso a las aulas del alumnado y resto del personal, por lo que urge adoptar medidas de prevención que eviten los contagios.

En este sentido, en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 de 9 de julio, se señala que *"Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben centrar en la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 metros, la higiene de manos y respiratoria, la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición de un caso"*, siendo fundamental la ampliación de las distancias de seguridad entre alumnos en las aulas para evitar la transmisión por vía aérea del virus.

Cabe señalar que, la disponibilidad de espacios en los centros viene determinada por las edificaciones disponibles en los centros y aunque, mediante otras actuaciones, se ha logrado recuperar espacios para la expansión de las aulas, no es suficiente, por lo que se precisan el incremento urgente del número de aulas en los centros educativos, no siendo factible acudir a su construcción de obra al implicar largos periodos de ejecución.

SÉPTIMO.- Con la llegada del otoño se ha detectado una segunda ola de contagios, que ha motivado, inicialmente la adopción de diversas medidas de confinamiento territorial y que finalmente han concluido con la publicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

FUNDAMENTOS DE DERECHO





Comunidad de Madrid

PRIMERO.- La presente orden se emite en ejercicio de las competencias atribuidas por Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y en aplicación por la Orden 11634/2012, de 27 de noviembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desconcentran y delegan determinadas competencias en los titulares de diferentes centros directivos de la Consejería.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, *"1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.*

2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia".

Dicho precepto establece una presunción legal relativa a la necesidad de actuar de manera inmediata, que abre la puerta a la tramitación de emergencia en los contratos que se celebren por las Administraciones Públicas para atender necesidades de protección de las personas para hacer frente al COVID-19, sin modificar la regulación de esta figura contenida en el artículo 120 LCSP.

Por su parte, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), establece que:

"1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.





Comunidad de Madrid

(. . .)

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario. (...)."

Por tanto, a pesar de que el órgano de contratación cuente con la habilitación genérica del artículo 16 del Real Decreto-Ley 7/2020, ha de dictar un acto de inicio de la tramitación de emergencia del artículo 120 de la LCSP, con justificación de la misma.

TERCERO- En el caso planteado del COVID-19, con efectos que lejos de remitir parecen rebrotar en múltiples puntos, se requiere de actuaciones contundentes que eviten una situación como la vivida en los meses precedentes y que dieron lugar a la declaración del estado de alarma y que revisten especial urgencia por el grave peligro de contagio que pueda derivarse del desarrollo del curso escolar sin las medidas de prevención adecuadas. La situación resulta especialmente grave, no solo por la naturaleza de la población afectada, sino también por su distribución territorial.

La red educativa puede convertirse en un foco de propagación, múltiple y distribuido, que haga nuevamente descontrolada la situación de la pandemia con el grave peligro que esta supone para la población en general, por ello resulta una situación de emergencia aumentar el distanciamiento de los alumnos en las aulas, lo que, a su vez, implica aumentar el número de aulas y con carácter inmediato.

Dada la naturaleza del suministro de aulas prefabricadas, es necesario incluir también las obras de urbanización, obra auxiliar y de acondicionamiento, así como los servicios técnicos asociados, para su instalación y posterior uso adecuado de las mismas, siendo estas obras de menor cuantía que el suministro de los módulos prefabricados.

En consecuencia, la contratación del suministro de aulas prefabricadas y las obras para su instalación en centros educativos de la Comunidad de Madrid como medida de distanciamiento contra el COVID-19 es una necesidad sobrevenida y totalmente justificada que deriva las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia y ha de ser atendida con toda celeridad y urgencia derivada del inicio del curso escolar, no siendo factible otra forma de contratación distinta a la tramitación de emergencia que satisfaga en tiempo la necesidad surgida para evitar un riesgo grave para la salud, por lo que se encuentra incluida en el supuesto del artículo 120 de la LCSP. En virtud de lo expuesto,

DISPONGO

PRIMERO.- Declarar la tramitación de emergencia para la contratación del suministro de cuatro aulas prefabricadas, las obras para su instalación y servicios técnicos asociados, a implementar en centros educativos de la Comunidad de Madrid como medida de distanciamiento contra el COVID-19, cuya instalación se realizará en el CEIP Legazpi de Arroyomolinos.





Comunidad de Madrid

SEGUNDO.- Ordenar que se ejecute lo necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida; así como efectuar la oportuna retención de crédito por un importe de 500.000 €.

TERCERO.- Comunicar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el presente Acuerdo en el plazo máximo de treinta días.

Madrid, 17 de noviembre de 2020

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
(P.D Orden 11634/2012 de 27 de noviembre BOCM 3-12)
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

Fdo.: Ignacio García Rodríguez

